La construcción de la Paz desde las regiones

Fernán E. González G., S.J.

En primer lugar, quiero comenzar por destacar la importancia de las múltiples iniciativas de la llamada Sociedad Civil en el nivel local y regional y de muchas experiencias de movilización social en contra de los hechos violentos en esos ámbitos, que evidencian la multiplicidad y variación de las relaciones de los actores sociales y políticos, armados y desarmados. Estas variaciones muestran la complejidad de las relaciones que se establecen entre la población civil y los actores armados, que varían entre el sometimiento, la resistencia, el acomodo, la resiliencia y la negociación, según sea la correlación existente de fuerzas y la autonomía de las comunidades.

Sin embargo, en un segundo lugar, quiero señalar que estos esfuerzos están, por lo general, aislados de los procesos de la negociación de La Habana y hasta de los niveles nacionales de la vida política. Así, algunos consideran que las negociaciones de La Habana carecen de importancia para los niveles regionales y locales, porque no corresponden a los problemas sentidos por sus comunidades, que son de carácter más inmediato y que son las motivaciones concretas de su movilización normal: el acceso a la salud, vivienda y educación, las desigualdades regionales y sociales, la inequitativa distribución de ingresos, la violencia urbana, las discriminaciones de las minorías étnicas y sociales, la violencia de género, etc.

Otros manifiestan no sentirse representados por las partes en La Habana, lo que indicaría tanto los problemas de legitimidad de la democracia representativa como la distancia de muchos sectores sociales frente a las FARC. Se podría incluso sospechar que algunas de estas posiciones parecen ocultar una cierta concepción corporativista de democracia, que buscaría la representación directa de algunos sectores, como las comunidades indígenas, campesinas y afrocolombianas, en la arena política. En esta concepción parecen moverse muchas de las organizaciones de la llamada sociedad civil, que se quejan de los límites de la democracia representativa y abogan por una democracia más directa, sin tener en cuenta lo poco representativos que son los liderazgos de sus pequeñas asociaciones y comunidades, que los hacen incapaces de proyectarse en la arena política. Además, como señalaba recientemente "Pacho Galán" en la sesión inaugural de la facultad de Ciencia Política de la Universidad Javeriana, normalmente las movilizaciones sociales, regionales y locales, han asumido un discurso de confrontación frente el Estado, que los deja sin margen de maniobra cuando el Estado decide negociar con la insurgencia. En sentido similar, no faltan tampoco los que se abstienen de

respaldar el proceso de paz para no hacerle el juego a las pretensiones reeleccionistas del actual presidente Santos.

A esta situación se añade el hecho de que la mayoría de las movilizaciones sociales a favor de la paz han obedecido tradicionalmente a una concepción positiva de paz, centrada en las propuestas de transformaciones estructurales y coyunturales que serían las condiciones para una paz duradera y sostenible. Y las pocas manifestaciones en la línea de una paz negativa, centrada en el fin del enfrentamiento armado, responden a las protestas contra hechos concretos de violencia. El resultado de este contraste es, como muestra el reciente informe del grupo DATAPAZ del CINEP/PPP, el descenso de las movilizaciones de los sectores sociales a favor de las negociaciones de La Habana y el ascenso de las movilizaciones lideradas por grupos políticos como la Marcha Patriótica y administraciones estatales de carácter nacional o local.

A mi modo de ver, estas diferentes posiciones siguen reflejando la confusión reinante entre las concepciones negativa o positiva de paz: es obvio que la paz negativa, el cese del enfrentamiento armado, no conduce necesariamente a la paz positiva, a la cual se le suelen colgar, como al árbol de Navidad, todos los sueños y utopías de un país marcado por la desigualdad social y económica. Pero también es obvio que el cese del enfrentamiento es una condición necesaria para la acción política colectiva encaminada a lograr los cambios que el país necesita. Por eso, las distancias entre los procesos locales y nacionales de paz manifiestan la falta de conciencia de que ambos están íntimamente interconectados. Si se piensa en una propuesta de paz desde la llamada Sociedad civil, no se puede prescindir de los resultados eventuales de la negociación de La Habana, ya que el éxito o fracaso de esos diálogos van a marcar sustancialmente los escenarios de la vida local y regional.

El contraste entre las concepciones de paz, negativa y positiva, está en el fondo de uno de los principales malentendidos de la información de los medios masivos de comunicación y de buena parte de los analistas que se ocupan del tema, que tienen como consecuencia, el desconcierto casi generalizado de la llamada opinión pública. Este malentendido es el resultado del contraste que se percibe entre la manifestación explícita y clara de la voluntad de buscar una salida negociada al conflicto por parte de las FARC en torno a la discusión de una agenda acotada de temas y las manifestaciones mediáticas de sus voceros sobre todos los temas posibles, que expresarían un eventual programa político de las FARC y sus concepciones generales sobre la sociedad, la economía y la política nacionales.

Obviamente, las FARC están en todo su derecho de manifestar públicamente cuáles serían las ideas centrales de lo que sería su programa político en caso de que se desmovilizaran y optaran por la confrontación política no armada. Pero no se puede confundir ese programa, que comprende propuestas descabelladas e irreales al lado de otras bastante razonables,

con lo que se está discutiendo en La Habana. Pero, para mí, el problema reside en que el lenguaje adoptado tiende a moverse dentro de una dinámica de confrontación amigo/ enemigo en términos absolutos y no dentro de un enfrentamiento entre adversarios relativos, que comparten algunos puntos comunes y se distancian en otros, y reconocen cierto grado de legitimidad en el adversario. Pero conviene aclarar que este lenguaje amigo/ enemigo, que obedece a un trasfondo maniqueo de la Política, no es exclusivo de las FARC sino que se encuentra también en funcionarios del gobierno, como el ministro de defensa y los altos mandos de los organismos estatales de seguridad como el ejército y la policía. Y en buena parte de los analistas y de los medios masivos de comunicación.

Este lenguaje confrontacional se ve reforzado porque generalmente no se asumen las consecuencias que se derivan de la decisión de dialogar en medio del conflicto. Esta decisión implica necesariamente que se seguirán presentando ataques y combates entre las partes confrontadas, sin que esto implique necesariamente falta de voluntad política por parte de ellas para buscar una salida negociada. Los problemas derivados de no asumir estas consecuencias se hacen evidentes en el doble rasero con el que se describen y analizan los hechos bélicos, que contrapone a los soldados de la patria asesinados en enfrentamientos aislados con los narcoguerilleros "neutralizados" o "dados de baja" en los severos golpes que el ejército viene propinando a la insurgencia.

Para superar este doble rasero, proveniente de la concepción maniquea del conflicto y de la diversa concepción de paz que se maneja, es necesario ubicar los diálogos de La Habana dentro del proceso más largo, gradual y complejo, de la reconstrucción del país en lo político, social y económico, que garantice una paz sostenible y duradera. Para ello, debemos aprender a movernos en un camino, conflictivo y paulatino, donde habrá avances graduales, fracasos, incertidumbres y hasta retrocesos, sin esperar una solución definitiva, lograda de la noche a la mañana, de todos los problemas y conflictos que aquejan a la sociedad colombiana. Distinguiendo claramente lo que se puede esperar de los diálogos entre los representantes de las FARC y del gobierno nacional, de las reformas sociales, políticas y económicas que el país necesita para responder a las causas profundas del conflicto. Estas reformas dependen del esfuerzo colectivo de la población colombiana para tramitar pacíficamente sus tensiones sociales en la arena de la Política, para lo cual es un paso indispensable la terminación del actual enfrentamiento armado, seguido de la creación de condiciones que permitan abordar la discusión pública de esos problemas. Esto es, UNICAMENTE, lo que esperamos de los diálogos de La Habana, pero con la conciencia de que es solo un paso necesario para un proceso político más amplio.

Esta doble instancia del problema representa serios desafíos para los regiones, subregiones y localidades, derivados de la necesidad de implementar los eventuales acuerdos generales en las situaciones particulares en las que se concretan, en el nivel micro, las llamadas "escisiones

maestras" del conflicto nacional. ¿Cómo llevar a cabo esos eventuales acuerdos en las diferentes regiones y localidades, sin reeditar la tragedia del genocidio de la Unión Patriótica, que es el fantasma que ronda detrás de muchas preocupaciones de los grupos de izquierda, armados o no? Y, por otro lado, sin que se repitan los abusos que se presentaron en la zona desmovilizada del Caguán y de sus zonas limítrofes.

Para responder a esas legítimas inquietudes, habría que trabajar simultáneamente en varios niveles, pero interconectados entre sí:

1. Hay que crear mecanismos de negociación concreta con los poderes locales y regionales realmente existentes, sean legales, ilegales, formales e informales, para que aprendan a apreciar las ventajas que les representaría un eventual proceso de paz para sus intereses particulares y a minimizar las consecuencias negativas que les acarrearía la competencia de la participación de los grupos insertados en la vida política concreta.

2. Hay que garantizar, de manera absoluta y explícita, que no se repetirá la llamada "combinación de las formas de lucha", que acompañó a la creación de la Unión Patriótica. La combinación de los avances electorales que amenazaban a los poderes locales y regionales, con el apoyo armado de las FARC, al lado de las extorsiones y secuestros de estos grupos contra las elites sociales, políticas y económicas de algunas regiones, fue llevando a una confluencia nefasta entre políticos locales, grupos económicos tanto los tradicionalmente dominantes como los emergentes y cercanos a los grupos narcotraficantes y algunos mandos de las fuerzas estatales de seguridad en los niveles locales y regionales, que resultó en la conformación de grupos paramilitares, el fenómeno denominado como parapolítica o paraeconomía. El error histórico de las FARC y de sus aliados políticos fue el no haber previsto que su combinación de formas de lucha traería como consecuencia el que sus enemigos la adoptarían como la repuesta lógicamente previsible, dada la tradicional tendencia de los grupos locales y regionales de poder a recurrir a grupos armados como respaldo de sus intereses.

3. Hay que asegurar el respeto absoluto de los derechos de las minorías por parte de los grupos que accedan al poder local, tanto en el caso del control político de los grupos provenientes de la guerrilla como en el caso de que el poder local siga en las manos de los que tradicionalmente lo han detentado.

4. Estas garantías de parte y parte, tienen un condicionamiento fundamental: el fortalecimiento sustancial de la institucionalidad local y regional, tradicionalmente muy precaria, mediante una serie de reformas políticas, económicas y sociales, acompañadas por la participación efectiva de sectores reformistas y progresistas del orden local y regional. Esto supondría la superación de las tendencias predominantes en estos sectores, que tienden a veces a asumir actitudes de confrontación central frente a las instituciones estatales, nacionales

o locales, dirigidas a crear proyectos alternativos, en una concepción antipolìtica de la política, que se acerca a posiciones anarquistas, comunitaristas o corporatistas frente al Estado realmente existente.

5. En esa dirección, habría que pensar en el rediseño de las relaciones institucionales entre el Estado central, los departamentos, municipios, corregimientos y veredas, que podría conducir incluso a un reordenamiento del territorio y a la redefinición del papel de los gobernadores y asambleas departamentales, cuyas funciones se han visto un tanto desdibujadas por la elección popular de alcaldes y gobernadores, que ha alterado los mecanismos de articulación entre la nación y las regiones, que tradicionalmente se habían llevado a cabo por las maquinarias de los partidos tradicionales. El carácter predominantemente municipalista de la descentralización y la crisis de legitimidad de los partidos y movimientos políticos ha alterado esos mecanismos sin producir alternativas que los reemplacen.

6. Estas medidas, centradas en la dimensión política, deben ir acompañadas por planes integrales de desarrollo rural para las regiones afectadas por el conflicto armado, aprovechando experiencias anteriores como el DRI, el PNR, las zonas de reserva campesina. Y de fortalecimiento fiscal de los municipios de esas zonas, mediante reformas del catastro rural, del manejo de las regalías y de otros mecanismos de carácter redistributivo.

7. Otras experiencias aprovechables en esa dirección serían las lecciones aprendidas por los logros y fracasos acumulados de iniciativas regionales y locales de desarrollo y paz, como el PDPMM, los PDP, los laboratorios de paz, las asambleas provinciales y organizaciones similares. Esas lecciones tienen que ver con lo económico pero también con lo social y lo político.

Diálogos CINEP/Programa por la Paz
Agosto, 2013

Si desea conocer más sobre el CINEP/PPP visite ***www.cinep.org.co***
Para más información contáctenos al correo ***comunicaciones@cinep.org.co*** o al ***2456181***